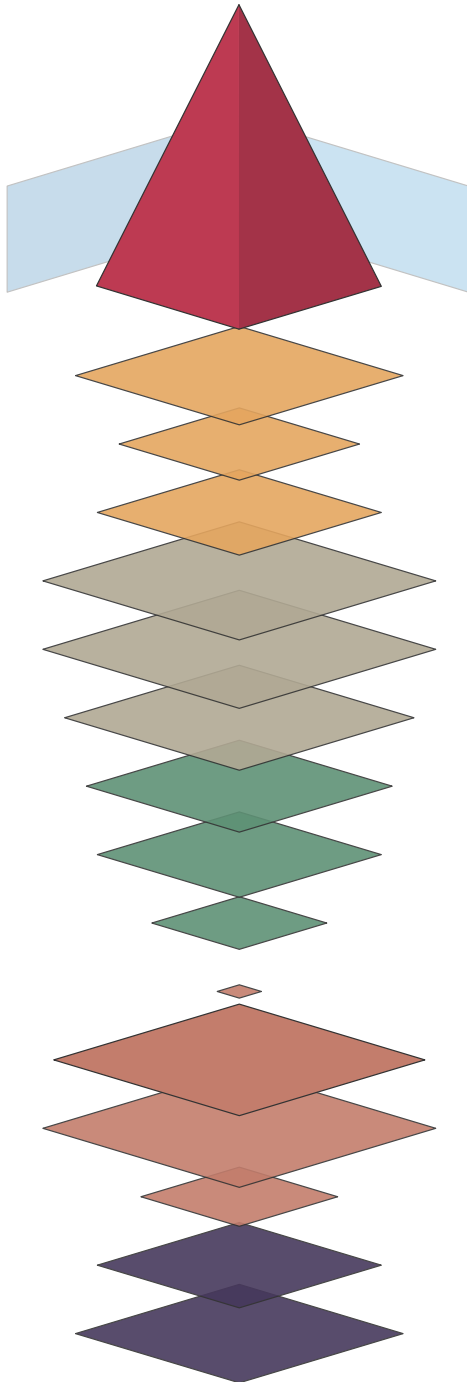
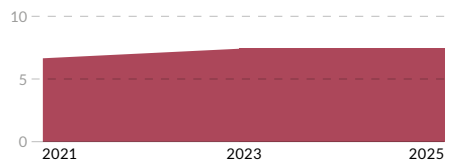


 **PARAGUAY**



 **7.48** $\searrow 0.04$
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

4.º de 193 países -
3.º de 35 países americanos -
2.º de 12 países de América del Sur -



 **MERCADOS CRIMINALES** **6.67** $\searrow 0.06$

TRATA DE PERSONAS	7.50	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	5.50	$\searrow 0.50$
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	6.50	$\searrow 0.50$
TRÁFICO DE ARMAS	9.00	0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	9.00	0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	8.00	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	7.00	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6.50	0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	4.00	0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	1.00	0.00
COMERCIO DE COCAÍNA	8.50	0.00
COMERCIO DE CANNABIS	9.00	0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	4.50	0.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	6.50	$\searrow 1.00$
DELITOS FINANCIEROS	7.50	0.00

 **ACTORES CRIMINALES** **8.30** 0.00

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	7.50	$\searrow 0.50$
REDES CRIMINALES	8.00	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	9.00	0.00
ACTORES EXTRANJEROS	9.00	0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	8.00	$\nearrow 0.50$



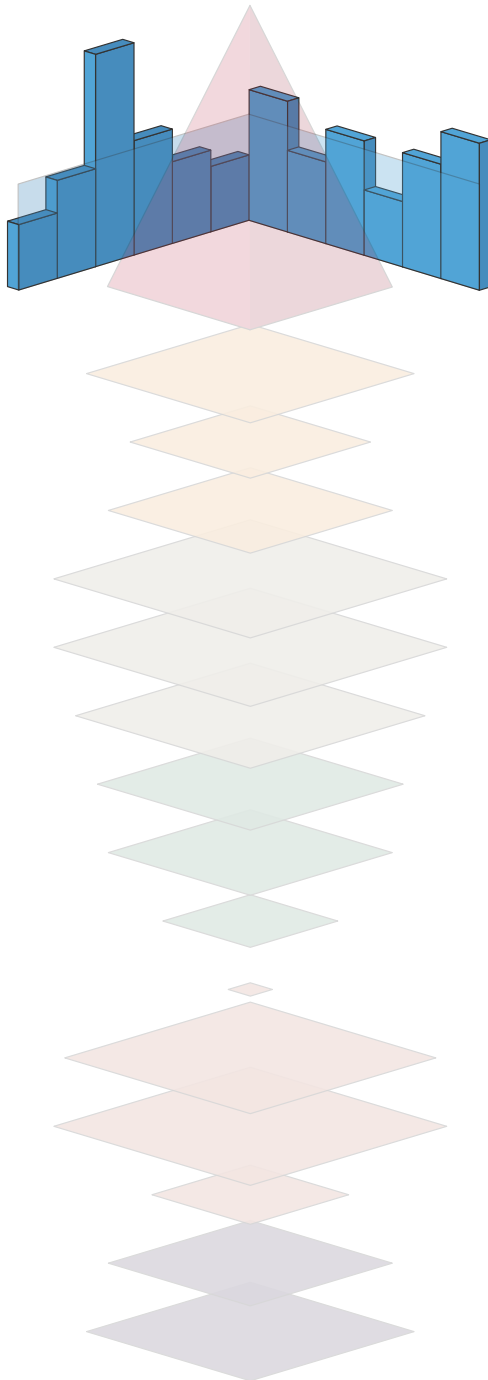
Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

PARAGUAY

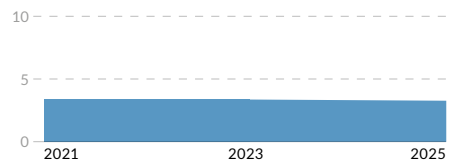


3.29 $\downarrow 0.13$ PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

154.º de 193 países $\downarrow 3$

30.º de 35 países americanos $\downarrow 1$

10.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2.00	0.00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3.00	0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6.50	$\downarrow 0.50$
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3.50	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	2.50	0.00
CUERPOS DE SEGURIDAD	2.00	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4.00	$\downarrow 0.50$
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2.50	0.00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	3.50	$\downarrow 0.50$
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2.00	0.00
PREVENCIÓN	3.50	$\uparrow 0.50$
ACTORES NO ESTATALES	4.50	$\downarrow 0.50$



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Paraguay sigue siendo un importante país de origen y de tránsito para la trata de personas y están muy difundidos el trabajo forzoso y la explotación sexual, que afectan a las poblaciones vulnerables, como las mujeres, los niños y los grupos indígenas. Miles de niños son explotados mediante el «criadazgo», una forma de servidumbre doméstica infantil. Los traficantes aprovechan las redes sociales y las dificultades económicas para atraer a sus víctimas, especialmente en las zonas rurales. Las ciudades principales y las zonas de triple frontera son los principales centros de tráfico, con destinos internacionales como Argentina, Brasil y España. La corrupción de los funcionarios agrava el problema y hay denuncias de sobornos y de fraude documental. La prevalencia de la esclavitud moderna sigue siendo elevada, impulsada por la vulnerabilidad económica y la limitada aplicación de la ley.

Paraguay funciona principalmente como un país de tránsito para las personas que son objeto de tráfico ilícito y que intentan llegar a Argentina y a Brasil, más que como lugar de destino. Las operaciones de tráfico ilícito de personas son limitadas y suelen involucrar a pequeños grupos, a menudo con la colaboración de funcionarios corruptos, especialmente en la frontera no regulada entre Brasil y Paraguay. Aunque las tendencias recientes indican un aumento de los migrantes procedentes de Venezuela, Argentina y Uruguay, atraídos por los bajos tipos impositivos y las mejores condiciones de vida, el mercado del tráfico de personas sigue siendo relativamente secundario.

La extorsión, aunque menos significativa que el tráfico de drogas o las operaciones de contrabando, es un problema frecuente, tanto en el contexto rural como en el urbano. En las zonas rurales, los grupos paramilitares imponen por la fuerza impuestos «revolucionarios» o «de paz» a las comunidades y a las empresas locales. En las zonas urbanas, los planes de extorsión suelen implicar la suplantación de identidad: por ejemplo, se hacen pasar por agentes de la Policía para inventar amenazas jurídicas. Aunque por lo general no se asocian con una violencia generalizada, los incidentes relacionados con la extorsión a veces han resultado mortales.

TRÁFICO

Paraguay se ha convertido cada vez más en un importante centro logístico para el tráfico de armas y abastece a grupos criminales brasileños, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El volumen de armas importadas supera con creces la capacidad del mercado legal. La corrupción de los organismos militares y los gubernamentales

ha facilitado el flujo ilegal de armas, entre otras cosas mediante documentos falsificados y ventas no autorizadas. Los esfuerzos internacionales conjuntos han sacado a la luz redes de corrupción, pero siguen siendo difíciles de rastrear. A pesar de las recientes suspensiones de las importaciones, la disponibilidad de armas se mantiene, gracias a la corrupción arraigada y a los nuevos proveedores. Cabe destacar que Ciudad del Este sigue siendo un punto conflictivo para las armas de contrabando vinculadas a grupos brasileños de tipo mafioso que controlan el tráfico de drogas y el de armas en la triple frontera. La afluencia de armas no solo ha alimentado la violencia, sino que también ha permitido que estas organizaciones criminales amplíen sus actividades, como la extorsión, dentro de las fronteras de Paraguay.

Paraguay es un importante centro de productos falsificados de la región, facilitado por la porosidad de las fronteras y por la informalidad económica. Ciudad del Este y el Mercado 4 de Asunción son los principales mercados. El país es una fuente primordial de los cigarrillos falsificados que entran en Argentina y Brasil y el contrabando está vinculado a la corrupción de alto nivel. Paraguay también es un país de destino de productos falsificados, como relojes, ropa deportiva y aparatos electrónicos, a menudo procedentes de China. Las redes criminales brasileñas y las chinas, incluidos los grupos de tipo mafioso, dominan la importación y la distribución, mientras que los actores privados locales participan en la fabricación y en la venta. Las ganancias sirven para financiar otras actividades ilícitas, en particular el tráfico de drogas, y las incautaciones sin precedentes ponen de relieve la magnitud del mercado.

Asimismo, el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales de Paraguay, uno de los más importantes de América del Sur, ha crecido hasta alcanzar un valor estimado de miles de millones de dólares. Hay mucho contrabando de cigarrillos ilícitos. El exceso de producción del mayor fabricante de cigarrillos de Paraguay se destina, supuestamente, a los mercados informales, a menudo controlados por organizaciones criminales brasileñas. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, persisten las operaciones informales y los cigarrillos paraguayos se introducen de contrabando en Brasil, Colombia y México. El contrabando de fertilizantes sigue rutas similares y el contrabando agrícola es significativo. Paraguay también sirve como nodo de tránsito y como destino para otros productos sujetos a impuestos especiales, sobre todo las bebidas alcohólicas. Impulsan el contrabando los altos precios, la evasión fiscal y la percepción de escasez y en general el público no advierte su impacto negativo.

MEDIOAMBIENTE

Paraguay se enfrenta a una grave crisis de deforestación, debida, sobre todo, a la tala ilegal y a las redes criminales organizadas que explotan las maderas duras valiosas, especialmente en la región del Chaco. Aunque la deforestación está prohibida en la región oriental, el Chaco adolece de ambigüedades legales que permiten una explotación desenfrenada. Las organizaciones criminales, que a menudo operan con sofisticación y secretismo, contrabandean madera a través de la zona fronteriza compartida con Argentina y con Brasil y la exportan a los mercados asiáticos. Estas operaciones pueden estar relacionadas con el tráfico de especies silvestres y con otras actividades criminales, aunque su alcance sigue siendo incierto. Las pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas al tráfico de drogas hacen peligrar aún más las reservas naturales. Las recientes operaciones coordinadas, que dieron lugar a detenciones y confiscaciones, expusieron un sistema bien organizado, que depende de documentos falsificados. Se identificaron una docena de entidades jurídicas, junto con dos redes criminales distintas, que están involucradas en la tala ilegal y en el tráfico de madera. La corrupción de los cuerpos de seguridad, incluido el soborno, obstaculiza los esfuerzos contra la tala, mientras que las amenazas violentas de los madereros aumentan los riesgos para las autoridades locales.

El tráfico de especies silvestres es frecuente en Paraguay, que sirve a la vez como lugar de origen y de tránsito. Como país de origen, el objetivo son unas cuarenta especies, entre ellas guacamayos, jaguares y armadillos gigantes, lo que supone una grave amenaza para la biodiversidad en regiones como el Chaco y el Bosque Atlántico. Impulsado por la demanda interna y las ventas en línea, el tráfico comprende la captura de los animales en sus hábitats naturales, a menudo para usarlos como mascotas o para taxidermia. La deforestación y la tala ilegal agravan la crisis y amenazan a especies como los jaguares y los armadillos gigantes. Del comercio se ocupan sobre todo individuos y redes nacionales poco estructuradas y la inacción del Estado y, en ocasiones, su complicidad, como ocurre con la expedición de permisos de caza deportiva, contribuye aún más a la disminución de las especies.

Paraguay es un lugar tanto de destino como de tránsito para la gasolina y los metales contrabandeados desde Argentina, debido a las disparidades de los precios y a la porosidad de las fronteras. El contrabando de combustible, que asciende a millones de litros al mes, ha disminuido recientemente, debido al aumento de los precios en Argentina. A lo largo de la frontera entre Paraguay y Argentina, la economía local se beneficia de las ventas ilícitas de gasolina, que perjudica a las estaciones de servicio legítimas. El contrabando de metales incluye grandes envíos de cobre, bronce, plomo y aluminio. Aunque los informes recientes son limitados, Paraguay también funciona como un lugar para legalizar el oro ilícito procedente de las minas de la región, antes de exportarlo a Europa. La corrupción y la aceptación social

dificultan la aplicación efectiva de la ley, mientras que las redes poco organizadas y los actores integrados en el Estado perpetúan la delincuencia.

DROGAS

Paraguay se ha convertido en un importante centro de tránsito de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia con destino a Europa. Las incautaciones ponen de manifiesto el aumento del tráfico, impulsado por la gran demanda europea. El consumo local, especialmente entre los jóvenes adictos al «chespi» (un derivado del crack), también alimenta el comercio interno. Los grupos brasileños de tipo mafioso, especialmente el PCC, dominan las redes del tráfico y aprovechan las fronteras y el accidentado terreno del Chaco. La zona de la triple frontera sirve de nexo para el contrabando de la cocaína y el de cannabis, a menudo vinculados al tráfico de armas. La corrupción obstaculiza los esfuerzos contra el tráfico, mientras que los diversos métodos de contrabando, como las rutas aéreas y las fluviales, afianzan aún más el papel de Paraguay como lugar clave de distribución, lo que exacerba la dinámica regional de las drogas.

Paraguay es el mayor productor y distribuidor de cannabis de América del Sur y abastece sobre todo a Brasil y a Argentina, lo que lo convierte en uno de los mayores mercados de cannabis del mundo. El cultivo se concentra en las regiones fronterizas, como Amambay y Canindeyú, donde hay organizaciones criminales, como el PCC y el CV, que dominan la producción y la distribución. El cannabis se introduce de contrabando por tierra y por las vías fluviales a los países vecinos y, en ocasiones, llega hasta Chile. Hay mucha corrupción y se dice que los agricultores pagan sobornos a los cuerpos de seguridad para que no les destruyan los cultivos, lo que introduce el tráfico de drogas en las estructuras estatales. A pesar de la disminución de los precios del cannabis, impulsada por su legalización, el cultivo sigue siendo muy rentable en comparación con la agricultura convencional y ofrece rendimientos hasta 30 veces superiores, ya que la mayoría de los consumidores siguen dependiendo del mercado ilegal, que es más barato. Las iniciativas de los cuerpos de seguridad, que incluyen las operaciones de colaboración con Brasil, han reducido la disponibilidad del cannabis, tras el desmantelamiento de los campamentos de drogas y la incautación de grandes cantidades. Sin embargo, el comercio ilegal de cannabis sigue financiando otras actividades delictivas. A medida que disminuye la rentabilidad del cannabis, gana terreno el tráfico de cocaína, lo que sugiere un cambio en la economía ilícita de Paraguay y en la dinámica del tráfico regional de drogas.

El mercado del tráfico de drogas sintéticas sigue siendo estable y poco desarrollado, en comparación con los mercados establecidos de la cocaína y el cannabis. El país funciona principalmente como lugar de tránsito para las drogas sintéticas procedentes de Europa, sobre todo de Suiza y de Inglaterra, y la mayoría de los envíos tienen como destino Brasil y Argentina, a través de la zona de la triple frontera. Existe

producción local, dirigida principalmente a los consumidores jóvenes. Sin embargo, aunque ha aumentado el consumo, el mercado sigue siendo moderado. Son frecuentes las incautaciones, especialmente en los aeropuertos, y suelen ser de éxtasis. En ocasiones, las farmacias venden fentanilo ilegalmente, sin receta médica. Las drogas sintéticas se suelen introducir de contrabando en bolsas de comida para mascotas o en el equipaje de los viajeros aéreos. El mercado está fragmentado, en él participan tanto individuos como redes y es posible que tenga conexiones con otras actividades ilícitas de la zona de la triple frontera. Las drogas sintéticas suelen ser más baratas en Europa que en América Latina.

El tráfico y el consumo de heroína no son frecuentes en Paraguay ni parecen estar muy extendidos en los países vecinos.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Paraguay se enfrenta a importantes retos en materia de delitos cibernéticos, en los que a menudo participan actores extranjeros que ofrecen servicios especializados. El ransomware es una amenaza creciente que afecta a cientos de empresas del país y complica los intentos de reforzar la ciberseguridad. En el 2024, un incidente interrumpió los servicios telefónicos. A pesar del aumento del ransomware y de los ataques sofisticados, la información sobre el mercado de los delitos cibernéticos en general sigue siendo limitada.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros están muy extendidos en Paraguay, impulsados por la corrupción sistémica, que fomenta la malversación y el fraude en línea. La evasión fiscal es generalizada, especialmente en la economía informal, donde empresas ficticias emiten facturas falsas para manipular los registros financieros. La incapacidad del país para recaudar una parte sustancial del IVA pone de relieve el impacto económico de esta actividad ilícita. El problema tiene su origen principalmente en el sector privado y genera importantes beneficios internos. Las estafas de phishing, algunas de ellas orquestadas desde las cárceles, explotan métodos como la suplantación de identidad para robar fondos y se centran, sobre todo, en los sistemas bancarios.

ACTORES CRIMINALES

En Paraguay, el crimen organizado depende de los grupos locales de tipo mafioso, que se dedican principalmente al tráfico de drogas y a cometer delitos violentos. El Clan Rotela, el grupo nacional más grande, opera mucho en las prisiones y en zonas urbanas, pero se ha debilitado, desde que hubo una importante ofensiva policial en el 2023. Las antiguas alianzas con organizaciones criminales brasileñas, como el PCC y el CV, se han convertido en rivalidades, lo que ha intensificado la competencia por el control de los mercados ilícitos. La corrupción les facilita el acceso

a las armas automáticas y pone obstáculos a los cuerpos de seguridad. Los grupos paraguayos de tipo mafioso también utilizan altos niveles de violencia, participan en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y llevan a cabo asesinatos selectivos. El Ejército Popular Paraguayo, de motivación política, también se dedica a la extorsión y a atacar las infraestructuras y mantiene influencia local, a pesar de las medidas represivas del Gobierno.

Las redes criminales se dedican a diversas actividades ilícitas, como la trata de personas, la extorsión, el comercio de productos falsificados, los delitos contra la flora y la fauna, el tráfico de drogas sintéticas y los delitos financieros. Estas redes, que operan sobre todo en zonas fronterizas y especialmente en la región de la triple frontera, aprovechan las conexiones transnacionales con sus homólogos extranjeros. El contrabando, en particular de cigarrillos producidos en el país, es la actividad más rentable y su distribución se extiende a Brasil, Bolivia, Argentina y otros países. La corrupción y la complicidad de algunos funcionarios de alto rango facilitan estas operaciones y permiten que los productos ilícitos y el dinero circulen a través de canales de distribución y de circuitos de lavado de dinero ya establecidos.

El panorama del crimen organizado en Paraguay está profundamente ligado a las estructuras del Estado, donde la corrupción y la facilitación estatal permiten la existencia de mercados criminales, como el contrabando, el tráfico de drogas y el comercio de armas. Desde algunos funcionarios de seguridad de bajo nivel hasta figuras políticas de élite, los actores integrados en el Estado suelen participar en operaciones criminales o las facilitan. La corrupción socava la resiliencia a la criminalidad y su influencia se extiende a los cargos públicos y a los puestos de alto rango. Las organizaciones criminales transnacionales, en particular las brasileñas, explotan estas vulnerabilidades y aprovechan a los facilitadores locales para expandirse. Algunos casos recientes de gran repercusión demuestran que los actores estatales protegen las empresas criminales o participan en ellas y algunos incluso ocupan altos cargos en el Gobierno. La destitución de altos funcionarios y los incidentes mortales que afectan a algunos políticos ponen de relieve la naturaleza sistémica de la corrupción y el persistente desafío que supone la lucha contra el crimen organizado en el país.

Paraguay es un centro clave para el crimen organizado transnacional y hay grupos brasileños de tipo mafioso, como el PCC y el CV, que dominan el mercado de la cocaína y el del cannabis y alimentan el tráfico de armas. El PCC, sobre todo, ha establecido un control fuerte, trabaja con actores integrados en el Estado y utiliza las prisiones para coordinarse y para reclutar gente. Además, las organizaciones mafiosas chinas explotan la zona de la triple frontera para la trata de personas, el contrabando y la extorsión. La libanesa Hezbolá aprovecha el comercio de la región para financiarse y opera sobre todo en Ciudad del Este. Es habitual la cooperación entre las redes nacionales y las extranjeras y las interacciones varían según el mercado. Esta dinámica plantea un reto para

la seguridad, ya que la capacidad armada del PCC supera a la de las fuerzas estatales y las influencias extranjeras intensifican las vulnerabilidades.

En el sector privado, la corrupción y la informalidad económica facilitan el lavado de dinero y las actividades delictivas. Algunas empresas importantes vinculadas a figuras influyentes aprovechan las lagunas normativas para dedicarse al comercio ilegal de tabaco y utilizan sus conexiones políticas para no ser investigadas. La dinámica transnacional es evidente, ya que las redes criminales utilizan empresas de exportación para traficar con drogas hacia Europa y a menudo emplean

documentos falsificados y rutas aéreas clandestinas. Los actores del sector agroindustrial que participan en delitos ambientales, como la deforestación a gran escala, actúan con impunidad, gracias a sus vínculos políticos y a la escasa aplicación de la ley. Además, se sabe que hay empresas legítimas que también participan en el omnipresente mercado de la falsificación. Esta convergencia del crimen organizado, la complicidad del sector privado y la gobernanza inadecuada subraya el papel de Paraguay como un nodo fundamental en las redes criminales regionales y mundiales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Los persistentes retos de Paraguay en materia de gobernanza se caracterizan por una corrupción arraigada, la influencia de las redes criminales en las estructuras políticas y el clientelismo generalizado. El control democrático sigue siendo limitado con la actual administración, que domina el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el municipal desde las elecciones del 2023 y margina las voces de la oposición y debilita las instituciones democráticas. La gobernanza se ve aún más comprometida por la discriminación sistémica de las comunidades rurales y las indígenas, las desigualdades de género que limitan los derechos de las mujeres y los niños y la destrucción del medioambiente, que pone en peligro los medios de vida y los derechos. Los esfuerzos para combatir el crimen organizado y las iniciativas contra el contrabando han dado resultados limitados, porque les estorba la connivencia entre los políticos y los delincuentes y reciben críticas por su ineficacia. Las políticas económicas dirigidas a combatir la pobreza y a crear empleo pretenden abordar las causas profundas, pero los esfuerzos para introducir reformas en materia de seguridad se enfrentan al escepticismo, debido a los intereses creados.

Paraguay ha de hacer frente a retos persistentes en materia de corrupción y de impunidad, a pesar de las medidas adoptadas para mejorar la transparencia. Durante el período que abarca el informe, el Gobierno promulgó leyes para mejorar el acceso público a la información y la transparencia de los contratos públicos. Sin embargo, el marco jurídico se ve perjudicado por su aplicación limitada y sus importantes lagunas, en particular en lo que respecta a la financiación política. Los escándalos de corrupción en los que están implicados altos funcionarios ponen de relieve la ineficacia de los mecanismos existentes. La disolución de la agencia nacional anticorrupción y el aparente debilitamiento de las normas sobre conflictos de intereses obstaculizan los esfuerzos contra la corrupción, cuya existencia en las instituciones públicas favorece el crimen organizado, como el

contrabando y el tráfico de drogas. El acceso a la información sigue siendo restringido, hay pocas posibilidades de recurrir y las disposiciones legales son ambiguas.

Paraguay ha ratificado los tratados internacionales sobre el crimen organizado, los estupefacientes, el tráfico de armas y la corrupción y ha adaptado su legislación nacional a las normas internacionales. El país participa en una amplia cooperación internacional, a través de acuerdos de extradición, aunque siguen existiendo dificultades para extraditar a figuras de alto nivel. Colabora activamente con sus vecinos regionales y con organismos internacionales, como el FBI y las estructuras de las Naciones Unidas, para reforzar la seguridad y para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, a finales del 2024, anunció que dejaba de cooperar con Estados Unidos, lo que puso en peligro algunas investigaciones claves. No obstante, en general, la inteligencia criminal de Paraguay es muy valorada en la región y sigue apoyando la persecución del crimen organizado transfronterizo mediante acuerdos con Brasil, Colombia y la Unión Europea.

El marco jurídico de Paraguay aborda diferentes formas del crimen organizado, pero la corrupción y la falta de planificación estratégica debilitan su aplicación. Las autoridades se centran en la cooperación con Brasil y con Argentina, especialmente en las fronteras, pero las medidas internas siguen siendo fragmentarias. Las iniciativas contra la trata de personas incluyen mejoras en los protocolos de procesamiento y apoyo a las víctimas, pero persisten las deficiencias, especialmente en lo que respecta al «criadazgo» (una práctica cultural profundamente arraigada en la sociedad paraguaya) y la protección de las mujeres. Las medidas contra la falsificación y la evasión fiscal siguen estando poco desarrolladas. Las leyes sobre los delitos ambientales y los cibernéticos siguen siendo insuficientes.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

La corrupción y la ineficiencia son un grave peligro para el sistema judicial y de detención de Paraguay, porque crean un entorno propicio para el crimen organizado. Las influencias políticas debilitan la independencia judicial y hacen que las personas influyentes puedan eludir la justicia, mientras que los ciudadanos desfavorecidos se enfrentan a penas más severas. Las leyes que limitan los casos judiciales a cuatro años animan a los acusados a retrasar sus juicios, lo que fomenta la impunidad. Algunos casos de gran repercusión mediática han puesto de manifiesto la incapacidad del Poder Judicial para hacer frente a la criminalidad transnacional. Las prisiones, superpobladas y mal gestionadas, están plagadas de corrupción y connivencia criminal, con lo cual las bandas se pueden dedicar al tráfico de drogas. Los esfuerzos por frenar la violencia en las prisiones han tenido un éxito limitado, en medio de un conflicto cada vez más intenso.

La seguridad se sigue enfrentando al reto de la corrupción y la criminalidad, que están arraigadas en los cuerpos de seguridad. La Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, y el Ejército, que incluye una Fuerza de Tarea Conjunta, luchan por mantener la credibilidad en medio de las acusaciones generalizadas de corrupción, soborno, extorsión y violaciones de los derechos humanos, como la tortura y el uso excesivo de la fuerza. El nivel actual de dotación de personal está muy por debajo de las recomendaciones internacionales, con lo cual amplias zonas del país son vulnerables a las actividades ilegales. Las zonas protegidas se ven muy afectadas por la insuficiencia de los cuerpos de seguridad y la grave escasez de guardaparques. Entre las medidas para reforzar la seguridad se incluye el refuerzo de las unidades motorizadas especializadas que se ocupan del microtráfico.

Por su situación, Paraguay es un centro clave para el crimen organizado, en particular el tráfico de armas y de drogas, ya que tiene zonas remotas donde se cultiva cannabis y fronteras mal vigiladas. Los principales puntos de tránsito carecen de vigilancia adecuada, lo que permite el contrabando transfronterizo y el transporte de drogas. Por ejemplo, en la región del Chaco, se sabe que los narcotraficantes que utilizan aviones aprovechan que en la región no hay vigilancia por radar. A lo largo de la frontera con Argentina, hay alrededor de doscientos cruces ilegales que facilitan el contrabando abierto de mercancías como el gas, a pesar de la presencia policial. Si bien se han hecho esfuerzos de cooperación internacional, persisten los retos en materia de aplicación de la ley. Aunque se han introducido medidas de ciberseguridad, entre ellas un plan nacional y las iniciativas del sector privado, la seguridad digital sigue siendo insuficiente.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Existe un riesgo elevado de lavado de dinero y de financiación del terrorismo, impulsados por una legislación fiscal generosa, los aranceles bajos, unas zonas de libre comercio no reguladas y una seguridad aduanera laxa, especialmente en la zona de la triple frontera. Según los informes, ha habido un aumento

significativo de los casos de lavado de dinero, relacionados principalmente con la corrupción, la evasión fiscal y el tráfico de drogas. El país ha establecido mecanismos para combatir el lavado de dinero, como una unidad de inteligencia financiera que analiza las transacciones sospechosas. Entre las medidas recientes figuran la utilización de macrodatos para detectar inconsistencias fiscales y la mejora de la cooperación interinstitucional. A pesar de los avances, la corrupción y la falta de voluntad política dificultan la aplicación efectiva, lo que suscita preocupación sobre la obtención de resultados genuinos.

La economía de Paraguay se caracteriza por una pobreza significativa, junto con un crecimiento dinámico. La agroindustria y la hidroelectricidad dominan la actividad económica, mientras que el 70 % de la población activa trabaja en el sector informal. A pesar de la moderada libertad económica, la importante economía informal y la debilidad del Estado de derecho dificultan las inversiones y el crecimiento del sector privado. El crimen organizado está muy infiltrado en el entorno regulatorio y el contrabando, la evasión fiscal, la malversación y el lavado de dinero obstaculizan el desarrollo. Las medidas contra la criminalidad siguen estando limitadas por la influencia política de las élites económicas que se benefician de las actividades informales, lo que reduce la voluntad política de reforzar los controles regulatorios y de frenar las prácticas económicas ilegales.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Gobierno carece de una base de datos centralizada para proteger a las víctimas y su identificación se ve dificultada por la falta de uniformidad en los protocolos, especialmente en el caso de las minorías y las poblaciones indígenas. Existe un mecanismo nacional de derivación que coordina la labor de los fiscales, la Policía y otros funcionarios, pero no hay protocolos universales. La capacidad de los refugios para las víctimas de la trata es limitada. Los servicios de apoyo psicológico, asistencia social y reinserción son insuficientes, sobre todo en las zonas rurales.

El enfoque de la prevención se caracteriza por unas medidas de seguridad reactivas, en lugar de utilizar estrategias proactivas, y se centra sobre todo en la lucha contra el tráfico de drogas y la trata de personas. Si bien existen iniciativas para concienciar sobre los riesgos de la trata, como las campañas en línea y la capacitación para inspectores de trabajo, la falta de coordinación y la escasa financiación dificultan una prevención integral. Que no haya un organismo especializado en la lucha contra la trata y que no se den las respuestas adecuadas al trabajo infantil y la explotación sexual obstaculizan los avances. Si bien existe un marco de prevención de las drogas dentro de las políticas nacionales y también una autoridad competente encargada de tomar medidas para luchar contra las drogas, el enfoque nacional en materia de prevención sigue teniendo un alcance y una eficacia limitados, debido a la falta de programas de reducción de daños y de informes anuales sobre sustancias

controladas, entre otras cosas. La prevención de los delitos medioambientales sigue sin contar con financiación suficiente y no se aborda de manera adecuada.

El entorno mediático de Paraguay está muy limitado. No se respetan la libertad constitucional de expresión ni la de prensa. La propiedad de los medios de comunicación está muy concentrada en un puñado de empresas poderosas, lo que influye en los contenidos y limita la diversidad. Los periodistas y las emisoras de radio comunitarias a menudo se enfrentan a amenazas, violencia y asesinatos, que suelen estar vinculados a las organizaciones criminales o a las autoridades locales, en un clima de impunidad. Las ONGs operan con relativa libertad, pero se enfrentan a una financiación limitada y a dificultades para colaborar con las autoridades. Los grupos de derechos humanos son marginados, estigmatizados y perseguidos. La legislación reciente impone controles estrictos a las organizaciones de la sociedad civil, lo que pone en peligro sus operaciones.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.